



## *Junta de Transparencia y Ética Pública*

Resolución N°1118bis/2024 de 6 de agosto del 2024

**VISTO:** lo dispuesto por el inciso 2° del art. 14 del Decreto N° 354/99 de 12 de noviembre de 1999; -----

**RESULTANDO:** I) que se solicitó informe a Asesoría Letrada respecto a la interpretación de dicho artículo del cual surge en sus *conclusiones 4° y 5°*: “4) *La JUTEP es un órgano asesor que se desempeña con autonomía técnica y ejerce su rol de Órgano de Control Superior en materia de corrupción y de ética en el ejercicio de la función pública. En tal sentido, cabe expresar que en virtud de una interpretación lógico-sistemática y contextual de la normativa vigente en la materia, y atendiendo a la evolución histórica que estos preceptos han tenido, entendemos que la actuación de la JUTEP no puede quedar restringida a tal punto de limitar en exceso el rol que debe desempeñar en un Estado de Derecho.*”; “5) *En tal sentido es que entendemos que, si bien en materia penal su rol está limitado en virtud de lo dispuesto por la norma del art. 14 del Decreto 354/999, no debe desconocerse la necesidad de que la Junta de Transparencia y Ética Pública se expida en los asuntos propios de su competencia que no estén restringidos por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.*”; -----

**CONSIDERANDO:** I) que la aplicación del principio de prevalencia de las normas superiores sobre las inferiores implica que en caso de que la interpretación de la norma inferior conforme a la superior no fuera posible, o si la aplicación de las reglas interpretativas condujera a una única interpretación incompatible con esa norma superior, no hay otra opción más que aplicar la norma de mayor jerarquía; -----

II) que en el caso del art. 14 del Decreto 354/99 estamos ante un artículo que no es contrario a lo que dispone el numeral 3° del art. 4 de

la ley 17.060 ya que ambos hacen referencia a cómo debe actuar la JUTEP ante las denuncias que se hicieren sobre determinados DELITOS: “serán presentadas ante el órgano JUDICIAL competente”. Es claro entonces que, en los temas referidos a DELITOS, quien es competente es el órgano JUDICIAL y no la JUTEP. Dicha limitación que tiene su fundamento en la falta de competencia jurisdiccional de la JUTEP, no implica que este organismo no pueda ejercer su principal función que es la administrativa y que se detalla en cada uno de los cometidos legales que le son atribuidos;

III) que, en el mismo sentido el art. 14 del referido decreto establece expresamente en su segundo numeral, que las denuncias que se presentaren por los “mencionados DELITOS no podrán ser objeto de conocimiento ni calificación por dicho órgano...” debiendo cursarse en forma inmediata a la Fiscalía, lo que implica que la JUTEP no puede conocer ni calificar al DELITO, y eso es obvio por lo ya expresado reiteradamente respecto a la competencia del organismo. Lo que no surge de dicha norma ni de otra del ordenamiento jurídico, es una limitación del actuar de la JUTEP dentro de sus competencias administrativas; -----

IV) que lo que determina el art. 14 del Decreto 354/99 tiene su fundamento en que refiere a la Junta Asesora Económico Financiera del Estado, creada por la original Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998, antes de la modificación sufrida por la Ley 19.797 de 13 de setiembre de 2019. En tal sentido, dicha junta era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, cuyo principal o casi único cometido era asesorar a la Fiscalía de Corte, con quien mantenía una relación muy estrecha y a quien, entre otras cosas, debían enviar informes mensuales. Situación que desde la Ley 19.340, con la transformación de la JUTEP en un Servicio Descentralizado, ya no ocurre; -----





## *Junta de Transparencia y Ética Pública*

V) que la competencia de la JUTEP está claramente determinada en la ley que la crea, en donde se hace mención a cometidos netamente identificados con la función administrativa del Estado; -----

VI) que en tal sentido dicho extremo surge de lo dispuesto por el art. 18 de la Ley 19.340, cuando refiere a que toda la normativa que regula los cometidos, atribuciones y organización interna de la Unidad ejecutora 022 “Junta de Transparencia y Ética Pública” será de aplicación al organismo creado por dicha ley en lo compatible con su naturaleza de servicio descentralizado; -----

VII) que, de igual forma, el numeral 7 del art. 2 de la Ley 19.340 plantea como uno de los cometidos de la JUTEP el de “ejercer la función de órgano de control superior de conformidad con el artículo III numeral 9 de la Convención Interamericana contra la corrupción con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”. Resultaría contrario a Derecho, que una denuncia deba ser enviada a la órbita penal por hechos de apariencia delictiva cometidos por un funcionario público, sin limitar el actuar administrativo del Poder Ejecutivo que puede continuar con el procedimiento sancionatorio administrativo (art. 173 y 227 del Decreto 500/991 y art. 76 de la Ley 19.121), pero la JUTEP, siendo un Servicio Descentralizado que tiene, entre otros, el cometido de la importancia establecido en el numeral 7 del art. 2 referido, no podría cumplir con su competencia administrativa cuando envía una denuncia a la órbita penal. Dicha limitación no surge en forma implícita ni expresa en el ordenamiento jurídico nacional. Por el contrario, lo que surge de las normas referidas y otras tantas (art. 173, 227 y Libro II, Sección IV del Decreto 500/991, art. 76 de la Ley 19.121, art. 12 del Decreto 222/2014,

art. 39 de la Ley 19.823) es la independencia de la competencia administrativa y jurisdiccional, principio básico de una democracia; -----

VIII) que la doctrina (Dr. Cajaville, Dr. Correa Freitas, Dra. Cristina Vázquez) es conteste en que la construcción jurídica del Estado de Derecho y su marco institucional es el que da adecuadas garantías para que los organismos estatales puedan cumplir sus cometidos, a través de las diversas funciones estatales, al servicio de las personas. Por tanto, todos los órganos del Estado, tanto los que cumplen función administrativa como aquellos que ejercen función legislativa o jurisdiccional, están sujetos a las reglas de Derecho del ordenamiento jurídico en su conjunto, en lo que fuere aplicable, al cual deben ajustarse en su proceder. Se destaca también como exigencia esencial de un Estado de Derecho la de la limitación y control del poder y la prevención del posible abuso del mismo (artículo 23, literal a) del Decreto-ley N°15.524 de 9 de enero de 1984); -----

IX) que la vinculación especial de los centros de autoridad estatales se sintetiza en el reconocido principio de especialidad que se manifiesta en la previsión jurídica de la limitación por la que un organismo público sólo puede actuar en el marco de la competencia otorgada por reglas de Derecho. En aplicación base del principio de separación de poderes se distinguen sustancialmente tres funciones del Estado: legislativa, administrativa y jurisdiccional, con las cuales se coordina la actividad del Estado; -----

X) que en la función administrativa tiene particular relevancia la noción de interés general o de interés público. Las reglas del Derecho Administrativo tutelan ese tipo de intereses de modo principal e inmediato, y la Administración pública, sujeta a ese ordenamiento, debe servirlos con objetividad (legalidad objetiva) e imparcialidad (artículo 2° del Decreto N°500/991 de 27 de setiembre de 1991). Una nota esencial del Derecho





## *Junta de Transparencia y Ética Pública*

Administrativo es su autonomía, lo que hoy en día no admite ser discutido seriamente (JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Teoría de Gobierno); -----

XI) que por otra parte en lo que refiere a la aplicación retroactiva del criterio del art. 14 del Decreto 354/99, corresponde aclarar que existen varias referencias normativas (por ejemplo Decreto N°500/991, Ley N°15.869) que establecen la obligación de la Administración de resolver en los casos en los que no se actuó o resolvió la situación de fondo planteada por la aplicación de un criterio contrario a derecho, casos en que no existió resolución firme de su archivo sino que un archivo a la espera de las resultancias en el ámbito penal. El art. 2 del Decreto N° 500/991 establece varios principios que obligan a la JUTEP a actuar, como lo son el de imparcialidad, legalidad objetiva, verdad material y buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario. Asimismo, el art. 8 señala que en el procedimiento administrativo deberá, entre otras cosas, evitarse la realización de formalismos o recaudos arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento. Por otra parte, el art. 12 expresa que la Administración no podrá, entre otras cosas, remitir al archivo expedientes sin decisión expresa firme emanada de autoridad superior competente, notificada al interesado, que así lo ordene. En referencia a la retroactividad de la ley, Cassinelli Muñoz (1999) destaca que no hay en nuestro ordenamiento, una prohibición general a todas las retroactividades, siendo prácticamente el único caso de retroactividad prohibida, el de las sanciones. El autor opina que, en ese marco, el legislador puede disponer soluciones retroactivas para corregir una injusticia; en tal caso “en el conflicto entre la seguridad jurídica y la justicia, puede inclinarse por la justicia”; -----

**ATENTO:** a lo dispuesto por el 14 del Decreto N° 354/99 de 12 de noviembre de 1999; numeral 3° del art. 4 de la ley 17.060, en la redacción dada por la Ley N°19.797; numeral 7° del art. 2 y art. 18 de la Ley 19.340; arts. 2°, 173 y 227 del Decreto 500/991 y art. 76 de la Ley 19.121; ley N° 15.869. -----

**EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA**

**RESUELVE:**

- 1°) Interpretese lo dispuesto por el inciso 2° del art. 14 del decreto 354/99 de 12 de noviembre de 1999, en el sentido que la JUTEP debe expedirse en los asuntos propios de su competencia que no estén restringidos por el ordenamiento jurídico vigente en la materia, por ser el órgano de control superior en materia de corrupción y de ética en el ejercicio de la función pública, por ser un Servicio Descentralizado con independencia técnica y con amplia competencia para el combate contra la corrupción, en virtud de la evolución histórica de la normativa vigente en la materia, lo que implica la actuación de la JUTEP dentro de sus cometidos frente a denuncias que puedan estar o no en la órbita penal. -----
- 2°) Adjúntese al acta, el informe de Asesoría Letrada que luce en el expediente y que forma parte de la misma. -----
- 3°) Archívese. -----

  
**Cr. Guillermo Ortiz**  
Vicepresidente

  
**Dra. Gabriela di Longo**  
Presidente